VEGETALES PODRIDOS Y SU PROPIO MARIDO EN LA CESTA DE LA JUEZ ALAYA

La juez Alaya, al cargo de la investigación de los ERE (y del caso Mercasevilla, y de las facturas de UGT-A, y de la gestión de Lopera en el Betis, y del caso Madeja...) se ha hecho celebre por su empeño en impedir que una manzana podrida estropee el cesto.

A tal efecto ha recopilado tal cantidad de fruta podrida en su celebre carrito que entre tanta podredumbre ha pasado casi desapercibida la presencia de Jorge Francisco Castro, ex-auditor de Mercasevilla y ¡sorpresa! casado con la señora juez.

Otra elección desafortunada de la señora juez fue la del administrador judicial del Betis CF club de fútbol, Francisco Estepa. Nombrado por la juez, ha resultado estar imputado en otro juzgado junto a ¡sorpresa otra vez! el marido de la juez.

Juzgar dos asuntos en los que está imputado su marido podría ser motivo de recusación, pero esta fue desestimada por la Audiencia hace tres años. Garzón o Elpidio deben alucinar, pues por mucho menos los han echado de la carrera judicial, hecho insólito en éste país.

Pero la justiciera no se corta ni aunque comparte cama y mantel con un justiciable. “Buenos días mi vida ¿te apetece un café, un zumo, o un auto exculpatorio?. Me voy a comer un damasco, que da mas asco lo que traen los periódicos...”.

Con estos precedentes, resulta chocante la clamorosa ausencia del fiscal defensor, pues esa es la nueva función del ministerio fiscal a tenor del precedente sentado por el fiscal Horrach defendiendo a la infanta.

Está por ver si el marido de la juez invocará la doctrina Urdangarina y se hará pasar por un florero que firma lo que dice su mujer, de la que está tan enamorado que se cree todo lo que dice. ¡Que bonito es el amor cuando se hace... lo que dice tu conyuge y la cama la pagan los contribuyentes!

ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL OPUS

La denominada "Cuarta Planta" de la "Clínica Universidad de Navarra" es citada continuamente por los ex-Opus Dei -que lograron escapar de la organización- como el lugar a donde llevan a miembros de la organización con problemas mentales. Según los ex-miembros del Opus, estos trastornos mentales, o son provocados por la forma de vida aplicada a los miembros, o por el acoso psicológico a que son sometidos aquellos en quienes detectan indicios de querer abandonar la organización.

En esta "Cuarta Planta" son diagnosticados por psiquiatras pertenecientes en exclusiva al Opus Dei y sometidos a fuerte medicación. Ex miembros del Opus también acusan y denuncian - donde pueden- prácticas que van más allá de la psiquiatría y se sumergen en la experimentación con tecnologías no convencionales de control mental a distancia.

“Las casas (del Opus) donde vive la gente están llenas de personas con problemas, deprimidos, que tienen que tomar pastillas constantemente. Las mujeres, mayoritariamente ocupadas en funciones auxiliares, aunque tengan titulación universitaria, están sometidas al dominio jerárquico de los varones".

Muchos niños y jóvenes se salen en cuanto pueden empezar a pensar por su cuenta y sienten pulsiones sexuales. Pero otros se auto reprimen, se fanatizan y uno de los efectos secundarios son los trastornos psicológicos de muchos chicos y chicas empujados al suicidio.

Una paciente de la "Cuarta Planta" relata: "Yo sufrí una depresión debido a la vida llevada en la Obra como numeraria, de negación de toda autoestima, de fomento permanente de la inseguridad personal, de incoherencia entre lo que se vive y lo que se piensa... las directoras de la Obra y los médicos me hicieron creer que Dios me quería enferma".

Los directivos del Opus consideran que la desviación ideológica sobre la línea marcada por la organización es una enfermedad mental, y que entonces los afectados son aconsejados o forzados a pasar una temporada en la "Cuarta Planta" bajo fuerte sedación mediante tranquilizantes y drogas debilitantes de la voluntad.

CNT-AIT Cádiz
Plaza los balbo (pescaitos), junto a la antigua oficina de correos

CÁDIZ LIBERTARIA

informACCIÓN DIRECTA

nº 44, febrero de 2014

No se puede esperar nada de la política (Fermín Salvochea)

FRENADA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA EN MADRID.
PASCUAL CONTRAATACA EN CÁDIZ

El deterioro intencionado de la sanidad pública con el que la mafia beneficiaria de la privatización pretende justificarla no ha tenido éxito en Madrid, donde la marea blanca ha conseguido un sonoro éxito y forzado la dimisión del Consigliere de sanidad, Lasquetty.

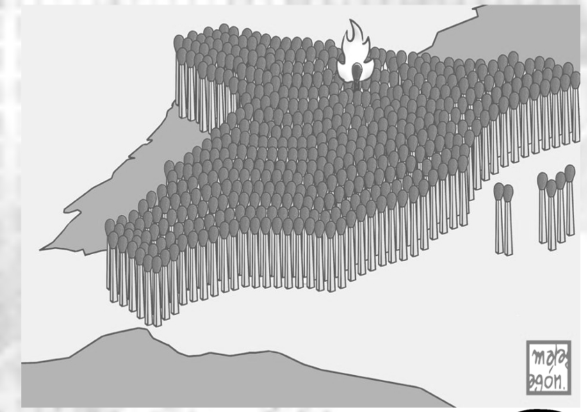
Se trata de una gran victoria de la movilización popular que muestra claramente el camino a seguir en la defensa de nuestros derechos, empezando por el derecho a la vidA garantizado por la sanidad pública.

La única alternativa es la lucha, pues tenemos que recuperar el terreno perdido en materia de salud. Y en Cádiz es especialmente grave la situación, pues la empresa Pascual no deja de crecer, mientras se reducen plantillas y se sobreexplota a los trabajadores de la sanidad.

La empresa José Manuel Pascual Pascual-Gestión Hospitalaria absorbe entre el 25 y el 50% de la atención sanitaria de las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. Ante la próxima finalización de sus respectivos conciertos con el SAS, la empresa ha movilizado a sus comités de empresa para presionar, señalando que las condiciones impuestas por el SAS no serían asumibles por parte de la empresa. La incertidumbre entre los trabajadores les ha empujado a manifestarse como rehenes de una empresa chupasangres como pocas, que deben ser absorbidos por la sanidad pública, y que esop no se va a conseguir si no nos ponemos la pila.

Que se puede vencer lo han demostrado los vecinos de Gamonal, que han dado ejemplo de como se acaba con las comoponendas corruptas entre la administración y los empresarios de su cuerda.

SALUD A LOS QUE LUCHAN



cntsovcadiz.blogspot.com
cntsovcadiz@yahoo.es

VUELTA (DE TUERCA) A ESPAÑA

A partir del 23 de agosto, Cádiz, Jerez, Algeciras, San Fernando y Arcos de la Frontera serán puntos de origen y destino de las tes primeras etapas de la vuelta ciclista a España.

Casualidad, son todos municipios con alcalde pepero. Unipublic, la empresa organizadora de la prueba, ha subrayado que la Vuelta siempre propone varias opciones al organismo correspondiente, en este caso la diputación, atendiendo a dos criterios: el recorrido y el tamaño de las ciudades de llegada y salida.

Así que la decisión se imputa a di(m)putación, que financiará la prueba con 400.000 euros, a los que se añadirán los gastos de organización, que dependen de los cinco Ayuntamientos. Jerez destinará a la prueba unos 150.000 euros, aunque arrastra una deuda de 744 millones. El resto de alcaldes peperos aún no han revelado su "inversión", pero está claro que se hará con nuestro dinero a la mayor gloria de los politiquillos.

Por lo visto piensan que, con no coger por el puente, todo está controlado, que aquí los parados están tan contentos que no va a haber protestas. No es así según un estudio publicado en el anuario de The Economist. España se encuentra en “alto riesgo” de conflictividad social: un 3, en una escala de 0 a 4 que mide el riesgo de que estallen revueltas en las calles. Es algo que contrasta con la sensación que tiene el español de que “poco pasa para lo que debería pasar”, en relación con la política de recortes y a la corrupción institucional que acapara las portadas de nuestro país.

El artículo distingue tres principales motivos por los que la paz social se ve amenazada en ciertas naciones: la oposición a regímenes dictatoriales (sobre todo en el mundo árabe), la reacción a una situación económica desastrosa (como en Grecia o en España, señala el periodista) y las aspiraciones de las clases medias en los países emergentes (como en Brasil o Turquía, indica).

The Economist señala que la situación económica, como por ejemplo un alto nivel de paro, no basta por sí solo para hacer estallar revueltas, ya que deberían confluir altos niveles de desigualdad, la evolución de la historia reciente, tensiones étnicas, una escasa protección social y, sobre todo, la pérdida de confianza en las instituciones (“una crisis de la democracia”).

Este último factor debe de haber sido decisivo para la inclusión de España en la parte más caliente del termómetro, teniendo en cuenta lo que muestran los datos del CIS sobre qué opinan los españoles de los políticos.

El juez Ruz conoce las colaboraciones de empresas de Gürtel con campañas electorales de dirigentes del PP como Teófila Martínez, Luis Rogelio Rodríguez, alcalde de Almería, o Esperanza Aguirre, cuya imagen en los carteles de las elecciones de 2003 fue sometida a retoques digitales por empresas de la trama Gürtel para eliminar arrugas y otros defectos.

Se hartaron de trabajar con el Photoshop según las facturas y otros documentos incautados a la organización. En concreto, la empresa Rialgreen, S.L., que estaba administrada por el 'número dos' de la trama Pablo Crespo --exsecretario de Organización del PP gallego-- abono los 662,36 euros correspondientes al "retoque Esperanza Aguirre", realizado en 2003 por Asa Digital. Según la factura emitida el 30 de octubre de ese año por esta última compañía, el trabajo consistió en "1 escaneo A3, eliminar arruga de brazo, suavizar arrugas, comisuras labios, línea inferior de ojos, verruga en la nariz, cuello: eliminar venas, y salida CD". La sesión de fotos se hizo en agosto del mismo año por el fotógrafo Miguel Toledano y costó 2.020 euros, pagados por Rialgreen.

Además, el mismo año, pero en mayo, otra empresa, Milímetro Diseño Gráfico, ya se había ocupado de otros retoques fotográficos de Aguirre para vallas publicitarias, por importe de 626,40 euros, también pagados por Rialgreen. Entonces el trabajo consistió en "retoques fotografía en pelo y ojos en alta resolución para valla color y nueva trama B/N. Nuegos retoques cambiando el color del jersey (más rojo). Nuevo tramado láser y grabación en disco".

La explicación de tanto retoque es que en el año 2003 hubo dos campañas electorales, las primeras en mayo de 2003, donde Aguirre no consiguió mayoría absoluta, que sí sumaban PSOE e IU juntos, y otra en octubre, después de que el 'tamayazo' dejase sin opciones de ser presidente de la Comunidad madrileña al socialista Rafael Simancas.

milímetro diseño gráfico s.l.

ALBARAN Nº 0243

O.T.

CLIENTE: RIALGREEN, S.L.

CUENTA: PARTIDO POPULAR

CONCEPTO: PP.- "ESPERANZA AGUIRRE"

CREATIVIDAD

BOCETACION

RETOQUES ✔ 540

ADAPTACIONES

FOTOMECANICA

IMPRESION

GRABACIONES

OTROS

TOTAL 540 €

COMPUESTO DE: RETOQUES FOTOGRAFICOS EN PELO Y OJOS EN ALTA RESOLUCION PARA VALLA COLOR Y NUEVA TRAMA B/N. NUEVOS RETOQUES CAMBIANDO EL COLOR DEL JERSEY (MAS ROJO). NUEVO TRAMADO CON LASER Y GRABACION EN DISCO

0935

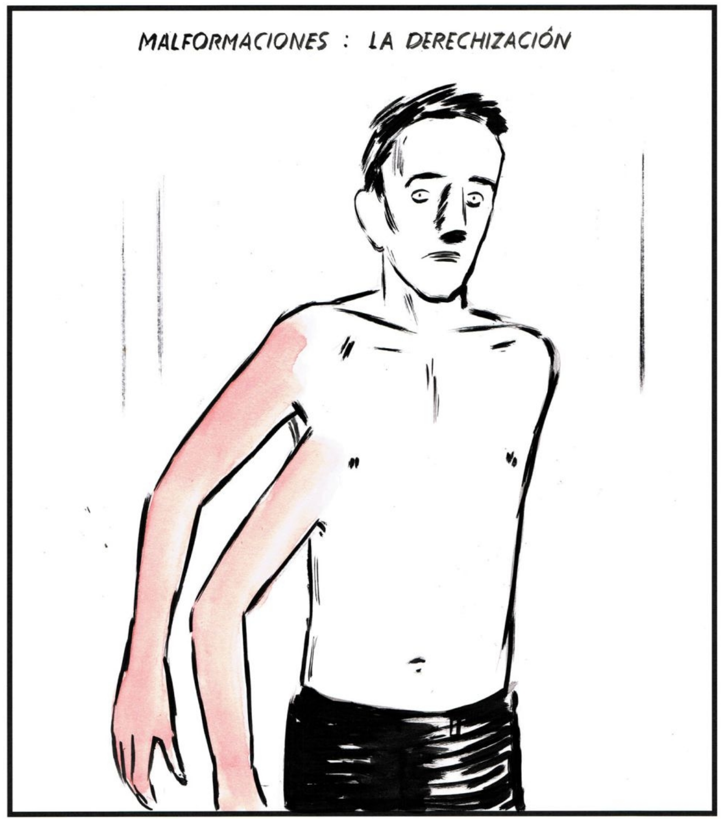
FECHA DE ENTREGA: 8/MAYO/2003

TODAS LAS PIEZAS CON FOTOCOMPOSICION, MAQUETACION, RETOQUE Y MONTAJE.

GÜRTEofiLa no tapa lo de la Zona Franca ni con Photoshop

Pero ni con Photoshop consgue Teóflila tapar la pestilencia que emana de la Zona Franca, donde a trancas y barrancas se abre camino la desagradable verdad sobre el papel del Ayuntamiento de Cádiz en la presunta trama creada para desviar dinero público desde la Zona Franca a la empresa Quality Food.

La Teófila es tan facha que tiene dos manos derechas, Romaní, imputado por malversación, y Jorge Moreno, representante del Consistorio en las negociaciones con la empresa.



Igual que le pasó al juez Castro con la Infanta, la Audiencia Provincial de Cádiz anuló un auto anterior en el que la juez llamaba a declarar como imputado a Romaní pero sin aclarar los motivos ni el delito del que le acusaba. No ha llegado a las 227 páginas de Castro, pero la juez ha tenido que redactar 12 páginas para explicar siete años de instrucción y los motivos que le han hecho ampliar recientemente las diligencias.

En este resumen actualizado se destaca que fue el ex-delegado de la Zona Franca Miguel Osuna quien anunció una querella contra el propietario de la empresa Quality Food, Manuel García Gallardo, por haber supuestamente estafado al organismo que él dirigía. Pero la juez cree que, más que engañado, fue colaborador y participante de la estafa, y que no actuó solo.

“De los hechos probados resulta que Osuna, con el asesoramiento de José Manuel Fedriani – actual director de la Zona Franca y entonces su jefe de gabinete –, Ignacio Romaní y otras personas por determinar, de acuerdo con Manuel García Gallardo, procedieron a desarrollar una conducta compleja, orientada a desviar del presupuesto dinero público”. Añade que Osuna “valiéndose de su prestigio con el auxilio de Fedriani y el beneplácito del Ayuntamiento de Cádiz obtenía de los caudales unas cantidades que financiaban la actividad empresarial de García Gallardo y del que se extraían para incorporarse a sus patrimonios individuales”.

La juez incide en que Romaní, Fedriani y “otros” ignoraron,transigieron o, en algunos casos, se aprovecharon de estas actuaciones. “Quienes nada hicieron por evitar o revertir esta situación pueden tener sus propias responsabilidades”.

La juez cree que el Ayuntamiento de Cádiz avaló la trama de Quality Food, y que las dilaciones del proceso se deben a la aparición de nuevas pruebas y los obstáculos puestos por los propios acusados. Romaní fue imputado, tras haber declarado como testigo, por las “contradicciones” en las que entró, y Jorge Moreno se presentó ante la juez como “asesor político” del Ayuntamiento para decir que no conocía ni a Miguel Osuna, ni a García Gallardo y que ni siquiera había estado en Zona Franca, declaraciones que chocan con otros testimonios que le sitúan como hombre clave en las negociaciones.

Romaní sigue en su cargo, cobrando dinero público a pesar de su imputación por malversación. La alcaldesa pone kla mano en el fuego por Romaní. Total, eso se arregla con cirugía *photoshoplástica.*

No tan contenta debe estar con Fernando Sicre(tino), ex-concejal popular en Cádiz, que aseguró a la juez que aunque él sí apoyó al inicio la llegada de Quality Food a la ciudad después observó cosas que no le gustaron. Sus recelos nunca se mostraron en las actas de la Zona Franca. En esos documentos, según Sicre, se censuró su malestar contra el avance inversor en Quality Food.

La asesora jurídica de la Zona Franca, actual secretaria general del Consorcio, declaró en su día que las actas de los comités, que debían recoger todo lo que se decía en ellos, tuvieron que ser acortadas a petición de Miguel Osuna, el ex-delegado de la Zona Franca. Fue González la que le explicó a Sicre que ese era el motivo por el que algunos de los recelos que él ponía a decisiones económicas de apoyo a Quality Food no constaban en esos documentos. La juez ya pidió hace meses a la Zona Franca la totalidad de esas actas.

Sicre comparecía en esta causa como testigo pero su nombre ya había aparecido mencionado varias veces. De él habló Romaní en su primera comparecencia en el juzgado como testigo. Romaní aseguró que fue Sicre, entonces concejal de Fomento, quien más apoyos dio a la instalación de la empresa en Cádiz, promovida por el entonces presidente de Nuevas Generaciones del PP de San Fernando Manuel García Gallardo. “Sicre era el que más apoyaba a Quality Food e incluso viajó con sus responsables a Madrid en busca de subvenciones”, señaló en septiembre. Sicre ha dicho a la juez que sí respaldó el proyecto pero que, cuando vio que se torcía, protestó y sus palabras no fueron incluidas en las actas del comité.

La defensa de García Gallardo, representado por el conocido abogado Marcos García Montes, cree que las palabras de Sicre evidencian la posible comisión de un nuevo delito: el de falsificación documental. García Montes se ha mostrado convencido de que el caso ya ha dado un vuelco y que su cliente, contra quien se presentó la querella inicial, acabará en el juicio como acusador en vez de como acusado. García Montes realizó hasta 24 preguntas a Romaní, pero el concejal imputado se negó a responderle a él y a la juez. “He vuelto a recurrir mi auto de imputación a la Audiencia Provincial y responderé cuando se resuelva”, ha explicado a los medios de comunicación. Romaní ya consiguió que la Audiencia revocase su primera imputación por no estar suficientemente argumentada, pero la juez dice que Romaní era “perfecto conocedor” de las “maquinaciones” urdidas en esta trama.

García Montes ha adelantado que pedirá que Jorge Moreno, mano derecha de la alcaldesa, Teófila Martínez, vuelva a declarar. La pasada semana, Moreno sostuvo ante la juez que no conocía ni a Osuna ni a García Gallardo y que su papel en el Ayuntamiento es de “asesor político”. El abogado defensor cree que Moreno mintió.

García Montes cree que Jorge Moreno miente al decir que no conocía ni a Osuna ni a García Gallardo y que su papel en el Ayuntamiento es de “asesor político”, y que el Consistorio puede estar cometiendo malversación si se demuestra que Moreno tiene despacho en el Ayuntamiento y usa recursos municipales, a pesar de que no está contratado por el Consistorio. Algunos testimonios sitúan a Moreno como hombre clave en las negociaciones sobre Quality Food.